

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO TREINTA DE FAMILIA

Bogotá D. C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

Rad: 11001-31-100-30-2021-00771-00

Clase de proceso: Acción de Tutela

Procede este Despacho a proferir sentencia dentro de la Acción de Tutela instaurada a nombre propio del ciudadano **RIGOBERTO GOMEZ JAIMES** con C.C 79106019 contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**.

ANTECEDENTES

El ciudadano **RIGOBERTO GOMEZ JAIMES** con C.C 79106019, inicia acción de tutela contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, por considerar que se le está vulnerando el **DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN**.

HECHOS Y PRETENSIONES

Refiere que, se encuentra incapacitado para desempeñar labores como técnico electricista desde el año 2015, por lo que ha solicitado a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones se le reconozca la pensión por invalidez desde el año 2018, a partir de que la Nueva EPS dio concepto negativo de rehabilitación.

Que en el año 2019 la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, lo remitió a medicina laboral donde lo conceptuaron de pérdida de capacidad laboral del 20%, siendo el resultado no verídico; por lo que, en el año 2020, impugno el fallo y el accionado lo envió para concepto de pérdida de capacidad laboral a la Junta Regional de Invalidez de Cundinamarca conceptuándolo en febrero de 2021 con una pérdida de capacidad laboral del 67%, iniciando así, el trámite ante la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones, peticionado pensión por invalidez, sin embargo le informaron que debía esperar la ejecutoria del concepto de PCL, la que salió en junio de 2021, radicando ante la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones los documentos exigidos para el trámite, informándole que el trámite tardaba otros 120 días.

Manifiesta que ha esperado más de 3 años, no ha podido volver a ejercer su profesión endeudándose para pagar salud y pensión, además de sus necesidades básicas como lo son su alimentación y transporte; pero la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones sigue retrasando injustificadamente el reconocimiento de la pensión por invalidez.

En razón a lo anterior pretende que el Juzgado tutele los derechos **DE PETICIÓN** y se **ORDENE** a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** se le reconozca la pensión por invalidez.

PRUEBAS

La parte accionante anexa a su solicitud, los siguientes documentos:

- Oficio No. SP- 2961 del 29 de octubre de 2020, referencia: “respuesta a petición radicada el 19 de octubre de 2020”.
- Oficio BZ2020_2341461_0476934 del 11 de marzo de 2020.
- Oficio BZ2021_7723129-1630636 del 08 de julio de 2021.

ACTUACIÓN PROCESAL

1.- Admitida la tutela el 12 de noviembre de 2021, se ordenó la notificación a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES**, y además, se vinculó a la **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE CUNDINAMARCA** para que en el término de dos (2) días se pronunciara sobre los hechos materia de la presente acción.

2.- El 12 de noviembre de 2021, se notificó a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES** y a la **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE CUNDINAMARCA**, a través del correo institucional del Juzgado, informando sobre la admisión de la presente tutela, adjuntando copia de la referida solicitud.

4.- La **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES** y la **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE CUNDINAMARCA**, brindaron contestación a la acción constitucional dentro de la oportunidad conferida.

CONTESTACIÓN ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES.

La entidad accionada refirió: “(...) se evidencia que a la fecha esta Administradora no ha vulnerado derecho fundamental alguno al afiliado”.

CONTESTACIÓN JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE CUNDINAMARCA.

La entidad accionada refirió: “(...) La entidad COLPENSIONES radicó solicitud de calificación ante esta Junta Regional de Calificación de Invalidez con el fin de resolver controversia presentada por calificación emitida en dicha entidad .2) Mediante dictamen 79106019-937 proferido el 12 de febrero de 2021, esta Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá determinó los Diagnósticos de Origen Enfermedad común, con un grado de Pérdida de la Capacidad Laboral de 67.50%, y Fecha de Estructuración¹⁷ de septiembre de 2019.3) La Junta Regional procedió a realizar tramite de notificación a las partes interesadas para el momento de la calificación, advirtiendo sobre la posibilidad de interponer los Recurso de

Reposición y/o Apelación de manera virtual dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la notificación del dictamen. 4) Ninguna de las partes interesadas interpuso los recursos de ley dentro de la oportunidad legal. 5) A solicitud del paciente, se expidió documento de certificación de ejecutoria y/o firmeza de dictamen. 6) En ese orden de ideas, el dictamen se encuentra en firme”.

CONSIDERACIONES

Aspectos preliminares

Este Juzgado es competente para conocer de la presente acción, por mandato de los artículos 86 de la Constitución Nacional, 37 del Decreto 2591 de 1991; numeral 1°, inciso 2°, del Decreto 1382 de 2000; y 38 de la Ley 489 de 1998.

La solicitud satisface las formalidades legales y no se advierten anomalías que invaliden lo actuado, lo cual habilita al Despacho para decidir de fondo el asunto.

Naturaleza jurídica de la acción de tutela

La jurisprudencia constitucional ha pregonado de antaño que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos.

Es claro, entonces, que este instrumento judicial se torna improcedente cuando la persona afectada tuvo o tiene la oportunidad de obtener la protección del derecho que estima amenazado, por los cauces ordinarios y ante las autoridades competentes, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela.

El art. 86 de la Constitución Política de Colombia, dispone: *“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma **o por quien actúe a su nombre**, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”*. El subrayado pertenece al Juzgado. En el caso bajo examen, el ciudadano **RIGOBERTO GOMEZ JAIMES** con C.C 79106019, quien actúa a través de apoderado judicial, se encuentra legitimado en la causa por activa para interponer la acción de tutela, en virtud del artículo 86 de la Carta Política.

Por su parte, la legitimación por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en que se acredite la misma en el proceso. En el asunto de la referencia, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, es a quien se le atribuye vulneración del derecho invocado y de quien se solicita cese su actuar vulnerador.

INMEDIATEZ

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede interponerse “en todo momento” porque no tiene término de caducidad.

La Corte Constitucional en Sentencia T-044/19 señaló, frente a este requisito: “El requisito de la inmediatez pretende entonces que exista “una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales”, de manera que se preserve la naturaleza de la acción de tutela, concebida como un remedio de aplicación urgente que demanda una protección efectiva y actual de los derechos invocados.

Sobre el particular es preciso señalar que el accionante, el radico derecho de petición ante el ente accionado el 8 de julio de 2021 y el 09 de noviembre de 2021, elevo acción constitucional, considerando un tiempo prudencial para su interposición.

SUBSIDIARIEDAD

El Decreto 2591 de 1991 establece expresamente que solo procede la tutela cuando “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”. Entonces, la procedencia de la acción se encuentra condicionada por el principio de subsidiariedad, bajo el entendido de que no puede desplazar los recursos ordinarios o extraordinarios de defensa, ni mucho menos a los jueces competentes en la jurisdicción ordinaria o contencioso administrativa.

El Despacho advierte que con la interposición de la tutela se busca la protección del **DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN** y es la vía que encuentra el accionante para asegurar su ejercicio.

Derecho Fundamental Invocado Como Vulnerado.

Derecho fundamental de petición.

Con relación al **derecho de petición** éste se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y fue desarrollado por la Ley 1755 de 2015 donde dispuso el término con el que cuenta el destinatario de dicha petición para responderla el cual manifiesta: “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción...”

En relación con este derecho fundamental ha precisado la Honorable Corte Constitucional:

“El derecho de petición, pese a su autonomía tiene como fuente material los derechos políticos en la medida en que estos facultan al ciudadano para controlar, directa o indirectamente, las decisiones de las autoridades legítimamente constituidas por obra de la participación popular. El núcleo esencial de este derecho está ligado a la necesidad de mantener canales adecuados de comunicación entre gobernantes y los ciudadanos que trasciendan el ámbito político y vinculen al miembro de la comunidad con la autoridad.

El derecho de petición comprende no solo la manifestación de la administración sobre el objeto de la solicitud, sino también el hecho de que dicha manifestación constituya una solución pronta del caso planteado. El derecho fundamental a la efectividad de

los derechos (C.P. Arts. 2 y 86) se une en este punto con el principio constitucional administrativo (Art 209).

La omisión o el silencio de la administración en relación con las demandas de los ciudadanos son manifestaciones de autoritarismo tan graves como la arbitrariedad en la toma de sus decisiones. Los esfuerzos de la Constitución por construir una sociedad más justa y democrática, necesitan ser secundados y de manera esencial por el cumplimiento de la obligación de los funcionarios públicos de responder y resolver de manera oportuna las peticiones provenientes de los particulares.

Por lo menos tres exigencias integran esta obligación. En primer lugar, la manifestación de la administración debe ser adecuada a la solicitud planteada. No basta, por ejemplo, con dar una información cuando lo que se solicita es una decisión. Correspondencia e integridad son fundamentales en la comunicación oficial. En segundo lugar, la respuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se plantea. El funcionario no solo está llamado a responder, también debe esclarecer, dentro de lo posible el camino jurídico que conduzca al peticionario a la solución de su problema. Finalmente, la comunicación debe ser oportuna. El factor tiempo es un elemento esencial para la efectividad de los derechos fundamentales; de nada sirve una respuesta adecuada y certera cuando ella es tardía”. (Sent. T-220/94).

El artículo 5 del Decreto 491 de 2020, dispone: “Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: (i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción. (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.

En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales”.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO.

Corresponde a esta juzgadora determinar si la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.**, se encuentra vulnerando el derecho fundamental de petición del ciudadano **RIGOBERTO GOMEZ JAIMES** con C.C 79106019 al no proceder a dar respuesta de fondo a la petición elevada por el accionante el 8 de julio de 2021 y radicada bajo el No. 2021_7723129.

Junto con el escrito tutelar se arrimaron como pruebas (relevantes):

Oficio BZ2020_2341461_0476934 del 11 de marzo de 2020, de la que se lee: “En atención al requerimiento de la referencia, en el cual indica “(...) necesito información de determinación de pérdida de capacidad laboral (...)” nos permitimos informarle que: El artículo 142 del Decreto 019 de 2012 regula el tema de la calificación de Pérdida de Capacidad Laboral de la siguiente manera: “(...)”.

Por lo anterior, nos permitimos indicar que, una vez verificado su expediente, se puede evidenciar que mediante radicado 2019_8357919 de fecha 21 de junio de 2019 se dio inicio al trámite de pérdida de capacidad laboral -PCL.

En consecuencia, esta Administradora procedió a asignar cita con la profesional Luis Peña Paez para el día 17 de septiembre de 2019 a las 9:40 en la dirección calle 86 A #23-12 Barrio El Polo IPS Genesys, a la cual usted asistió.

Así las cosas, el caso se encuentra en validación de su valoración, y en caso de surtir de manera satisfactoria, se proceder a emitir y a notificar el dictamen de pérdida de capacidad laboral. No obstante, en el evento que se requiera, se le solicitara exámenes adicionales, esto, con el ánimo de realizar una calificación integral (...). ”.

Oficio BZ2021_7723129-1630636 del 08 de julio de 2021, Referencia: Radicado No. **2021_7723129 del 8 de julio de 2021** del que se lee: “ (...) Nos permitimos informarle, que para poder continuar con el tramite mencionado en la referencia es necesario que resuelva las siguientes situaciones:

| Tipo de Validación | Motivos de Rechazo |
|-----------------------|--|
| Documentos requeridos | Certificación de EPS de pago de incapacidades o certificación de no pago de incapacidades o certificación de afiliación al régimen subsidiado Documento. |

Por lo anterior, le solicitamos que en un término no superior a un (1) mes contado a partir de la fecha, haga entrega de los documentos relacionados en esta comunicación, en cualquiera de nuestros Puntos de Atención de nuestra red. Lo anterior, con el fin de continuar con el respectivo proceso, en caso contrario se archivará su solicitud, sin perjuicio que posteriormente la reactive aportando el (los) documento (s) pendiente (s) Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011”.

Foto de radicado de solicitud radicado **2021_7723129** del 08/07/2021.

Estado de solicitud: “En este momento la solicitud está siendo analizada por un profesional del área competente para resolverla. Recuerde que la fecha límite para dar respuesta es: **05/11/2021 correspondiente a 120 días calendario**”.

Con la contestación de la tutela el accionado no se pronunció frente a los hechos y pretensiones de la acción de tutela, guardó silencio frente a la omisión de la contestación al derecho de petición elevado por el accionante el 08 de julio de 2021, mediante el cual solicito el reconocimiento de la pensión por invalidez, tampoco se allegó a este escenario documental que pueda ser valorada por el Despacho mediante

el cual se acredite se haya procedido a dar contestación al derecho de petición y se haya puesto en conocimiento del accionante.

Ahora bien, el artículo 29 de la Constitución Nacional establece: “*El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas...*”

El espíritu de la norma en cita, es la garantía con que cuenta toda persona o la sociedad, para pedir de las autoridades competentes la protección de su derecho de defensa, que le permitan una decisión en justicia, cuando éste se encuentre amenazado por actuaciones judiciales y administrativas ante la inobservancia del principio de legalidad.

Una petición no se considera debidamente tramitado con su recepción, ni tampoco con una respuesta laxa y abierta, pues por mandato constitucional la entidad ante quien se haya elevado la solicitud está en la obligación de proveer al ciudadano de una respuesta pronta que satisfaga plenamente sus deprecaciones, entonces, de no cumplirse con estos supuestos, el juez constitucional, estará en la obligación de requerir a quien vaya en contravía del derecho fundamental para que entre a resolver de manera inmediata el asunto objeto de pedimento, como lo ha reiterado la H. Corte Constitucional en Sentencia T-523/10 de la siguiente manera:

“... c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: **1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario...**” (subrayado y negrilla por el Despacho).

En consecuencia y dando cumplimiento a lo dicho por la H. Corte Constitucional, y como quiera que, a la presentación de este Instrumento Constitucional, no se ha dado respuesta de fondo, clara y precisa al derecho de petición solicitado por el accionante, se considera que no se han satisfecho los requisitos jurisprudenciales establecidos para tal fin.

En eventos como el del caso bajo estudio, la Corte ha reconocido que la omisión de respuesta constituye una violación de este derecho fundamental, y que además da lugar a su protección mediante la acción de tutela, lo cual puede acarrear sanciones disciplinarias para el funcionario que negligentemente ha omitido cumplir con su deber. Así lo sostuvo esta Corporación en la sentencia T-242/93.

Por lo anterior, se encuentra probado que dicha demora va en detrimento de los intereses del accionante, razón por la cual, y sin más consideraciones se tutelaré el derecho de petición, en consecuencia, se ordenará a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas (48 h.) contadas al recibo de la respectiva comunicación, procedan a resolver de forma y de fondo el derecho de petición elevado por el ciudadano **RIGOBERTO GOMEZ JAIMES** con C.C 79106019, el día 08/07/2021, bajo el No. **2021_7723129**. Solicitando a su vez remitir copia de la misma a este Despacho Judicial conforme las prescripciones del artículo 23 del Decreto 2591 de 1991.

Ahora bien, respecto de la pretensión que se realiza en el escrito de tutela frente al reconocimiento de la pensión de invalidez, ha de precisarse al tutelante que en

relación al requisito de subsidiariedad ha indicado la Corte Constitucional en Sentencia T- 359/19: “Según lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 5º, 6º y 8º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial, subsidiario y sumario, al que puede acudir cualquier persona cuando sus derechos fundamentales resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión en que incurra cualquier autoridad pública o un particular, esto último, en los casos específicamente previstos por el Legislador.

En razón del carácter subsidiario de la tutela, esta procede en dos situaciones: *(i) cuando en el ordenamiento jurídico no existan otros mecanismos de defensa judicial, idóneos y eficaces, para la protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados;* y *(ii) cuando, a pesar de su existencia, el accionante se encuentra expuesto a la consumación de un perjuicio irremediable, evento en el cual, en principio, el amparo sería de carácter transitorio.* El subrayado pertenece al Juzgado.

En contraste, la tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, idóneos y eficaces, y no exista la posibilidad de consumación de un perjuicio irremediable. Lo anterior, entendiendo que el mecanismo judicial resulta **idóneo** cuando (i) se encuentre regulado para resolver la controversia judicial y (ii) permita la protección de las garantías superiores. La **eficacia** se relaciona con la oportunidad de esta protección”.

En el caso en concreto considera el Despacho que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, teniendo en cuenta que **(i) Existe otro mecanismo de defensa judicial idóneo y efectivo.** Por lo que el Despacho evidencia que el accionante cuenta con los mecanismos de defensa judicial ante la jurisdicción ordinaria, los cuales son idóneos y eficaces, para resolver este tipo de controversias judiciales y, por su naturaleza, permiten una respuesta oportuna de la administración de justicia.

Aunado a lo anterior, no se evidencia en el sub júdece el riesgo de consumación de un perjuicio irremediable.

En Sentencia T- 359/19 la Corte Constitucional indicó frente al perjuicio irremediable: “para tener la connotación de irremediable debe ser **(i) inminente**, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; **(ii) grave**, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; **(iii) las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes;** y **(iv) la acción de tutela sea impostergable** a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad”.

Además, en Sentencia T 046/2019 se reseñó por la Honorable Corte Constitucional: “Por otra parte, el Tribunal Constitucional se ha referido a la procedencia de la acción de tutela contra decisiones emitidas por las entidades administradoras de pensiones y ha determinado que, en esos casos, es necesario demostrar: (i) un grado mínimo de diligencia por parte del accionante al solicitar la protección del derecho invocado y (ii) la afectación del mínimo vital.”.

En la presente instancia constitucional no fue allegada documental que acredite que el ciudadano **RIGOBERTO GOMEZ JAIMES** con C.C 79106019, sea una persona de la tercera edad, padezca una enfermedad catalogada como catastrófica y/o se encuentra afectado su mínimo vital, si bien lo refirió dentro de los hechos, se advierte que la sola manifestación no basta para el convencimiento de la Juzgadora; así las cosas, no se encuentra superado el requisito de subsidiariedad.

Tampoco, en el caso bajo análisis, ni los hechos mencionados en la demanda ni las pruebas allegadas al expediente, evidencian que el accionante se encuentre expuesto a un riesgo inminente y grave, que exija medidas urgentes e impostergables, al punto de que el juez constitucional deba asumir la competencia del juez ordinario, exceptuando la subsidiariedad de la acción de tutela.

Atendiendo que no se observa que la **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE CUNDINAMARCA** haya desplegado actuar que vulnere o ponga en riesgo los derechos del accionante, se ordena su desvinculación.

EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

RESUELVE:

PRIMERO: Tutelar el Derecho de Petición, invocado por el ciudadano **RIGOBERTO GOMEZ JAIMES** con C.C 79106019, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Ordenar a **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas (48 h.) contadas al recibo de la respectiva comunicación, procedan a resolver de forma y de fondo el derecho de petición elevado por el ciudadano **RIGOBERTO GOMEZ JAIMES** con C.C 79106019, el día 08/07/2021, bajo el No. **2021_7723129**. Solicitando a su vez remitir copia de la misma a este Despacho Judicial conforme las prescripciones del artículo 23 del Decreto 2591 de 1991.**Oficiese.**

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el ciudadano **RIGOBERTO GOMEZ JAIMES** con C.C 79106019, frente a la pretensión tendiente al reconocimiento de la pensión por invalidez en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, por las razones expuestas.

CUARTO: Contra el presente fallo procede impugnación por la vía jerárquica.

QUINTO: Remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para la eventual revisión del fallo de tutela, en caso de no ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

SEXTO: Notificar esta decisión a las partes por el medio más expedito. Líbrense comunicaciones.

NOTIFÍQUESE,

**VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS
JUEZ**

Firmado Por:

Viviana Marcela Porras Porras

Juez

Juzgado De Circuito

Familia 030

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d25ebd260ce66434ec7af56bbbcd3fff52416967a4d6ec16cf0e3b247aa8f444**

Documento generado en 24/11/2021 08:07:00 AM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>